PAGO DEL SERVICIO DE ASEO URBANO COMO CONDICIÓN NECESARIA PARA LA DECLARACIÓN Y PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

En fecha dos (2) de mayo de 2024, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia publicó la Sentencia N° 0209 (caso “*SURNET TELECOM, C.A.*”), en donde se ratifica el criterio, según el cual, los municipios están facultados para adoptar las medidas que consideren necesarias a los fines de conseguir que el pago del aseo urbano sea cumplido por los contribuyentes, incluyendo el condicionamiento respecto al pago de otras obligaciones tributarias, así como la entrega de permisos y licencias.

La sentencia señala que, a pesar de la voluntad de los contribuyentes de cumplir con sus obligaciones de declarar y pagar el impuesto de Actividades Económicas, los mismos podrían verse impedidos en caso de no haber cancelado previamente la tasa de aseo urbano, incluso, aunque dicho fundamento no se encuentre tipificado en ningún cuerpo normativo.

Bajo este argumento, la Sala se encarga de reafirmar lo decidido mediante la Sentencia N° 2343 del veinticuatro (24) de noviembre de 2022, dictada en el transcurso de la Pandemia COVID-19 por el Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; la cual, dispuso en su oportunidad que las medidas adoptadas por los municipios tenían

como propósito salvaguardar el bien común, acatar el Estado de Alarma y reafirmar la obligación de los ciudadanos de cumplir con las cargas impositivas y otras obligaciones derivadas del servicio prestado por las diferentes expresiones del Poder, a través de concesiones (tal como es el caso del aseo urbano). Dicho esto, frente a la obligación de colaborar con la higiene, la salud y la vida a través del pago de aseo urbano (catalogado por la Sala como un “deber constitucional”), fueron admitidas las condiciones dispuestas por los municipios:

“Aunado a lo anterior, no solo se busca recrear la importancia de la recolección de desechos en estos difíciles tiempos, sino la relevancia en todo momento de esa importante labor cuya competencia se le otorga a los municipios, obligados corresponsablemente con los ciudadanos a que se cumpla con el postulado constitucional que pretende de manera preventiva lograr la higiene y salud de los habitantes.”

La sentencia objeto de análisis, ratifica las acciones administrativas y judiciales ejercidas por los municipios para lograr que se cobre lo adeudado por concepto de aseo urbano y domiciliario, con el fin que se mantenga la regularidad y eficacia de tal servicio. O, dicho de otra manera, la Sala consideró que “*la actuación de la administración municipal se ciñó de manera estricta a la normativa vigente, con la finalidad de lograr el cumplimiento por parte de la actora de su obligación de pagar el servicio de aseo urbano*”, incluso a pesar que no existe en nuestra legislación, como ya fue indicado, disposición legal alguna que

establezca el pago del aseo urbano como requisito para la declaración y pago del Impuesto sobre Actividades Económicas.

Finalmente, es concluido por la Sentencia N° 0209 que “(...) *si bien la tarifa correspondiente al servicio de aseo urbano, no tiene carácter tributario cuando lo presta un concesionario, la multa impuesta a través del acto administrativo impugnado en el presente juicio sí ostenta naturaleza tributaria*”. Tal argumento debería servir, justamente, para sostener la inconstitucionalidad de la actuación de la Administración Tributaria Municipal, sin embargo, esto no representa ningún problema a entender de esta Sala.

Los argumentos esgrimidos por la Sala Político-Administrativa no hacen más que alertar a los contribuyentes y doctrinarios sobre la violación de principios de índole constitucional, como lo es el principio de legalidad, que constriñe a la Administración a actuar con sometimiento a la Ley y al Derecho. Violación que queda clara al instante en que la Sala comete la falacia de aseverar que “*la actuación de la administración municipal se ciñó de manera estricta a la normativa vigente (...)*”, imperativo normativo condicionante que, hasta el día de hoy, resulta desconocido.

Debe recordarse que la potestad administrativa consigue su límite en virtud al principio de legalidad y a la competencia administrativa. Esto implica que la Administración se encuentra impedida de ejercer su poder en la forma en que ella considere mejor, ya que dicho poder deberá ser ejercido única y exclusivamente como las leyes lo prevén. Este

es el doble rol garantista que gozan los administrados: al respetarse el principio de legalidad, surge un estado de seguridad jurídica para ellos; y, por argumentación a contrario, con la violación de dicho principio el administrado queda privado de derechos tales como el derecho a acceder a los órganos de la Administración Pública, derecho a realizar peticiones ante los organismos, derecho a la buena gestión administrativa de rango constitucional y acceso a la justicia (todo esto, por impedirse el acceso a los medios dispuestos por el municipio para la declaración y pago del Impuesto de Actividades Económicas), derecho a la oportuna respuesta de la Administración Pública (al sujetarla al pago previo del servicio de aseo), sin contar con la violación del principio *non bis in ídem*.

A través del *non bis in ídem* se pretende garantizar a toda persona que no será juzgada dos veces por el mismo delito o infracción; sin embargo, en el presente caso se sanciona un mismo hecho (impago del servicio de aseo urbano) con varias consecuencias jurídicas. El incumplimiento respecto al pago del servicio de aseo urbano acarrea, de por sí, una deuda a la que se suman los intereses correspondientes; por tanto, aplicar un castigo adicional (como el impedimento para presentar la declaración y pago de obligaciones tributarias, la obstaculización para realizar trámites administrativos u obtener solvencias, y otros conceptos distintos al aseo urbano) sería una desproporción de la pena, la cual, debe guardar congruencia con la gravedad de los hechos delictivos. Por tal razón, la medida adoptada por la Administración Tributaria Municipal y ratificada en esta sentencia es, en resumidas cuentas, inconstitucional.

En caso de requerir información adicional sobre el tema, puede contactarnos a través de nuestros correos electrónicos a las direcciones señaladas al final de este Legal – Tax.